

Sinaloa: pluralismo social y pluralismo político

Notas a favor de la representación proporcional

Aristipo

Sociedad, democracia y pluralismo: elogio de la diferencia

El elemento fundamental y más legítimo de la democracia es la sociedad civil. Esta afirmación perteneciente a Václav Havel, el dramaturgo que estuvo al frente de la *revolución de terciopelo* y encabezó el gobierno democrático de Checoslovaquia y posteriormente el de la República Checa desde su constitución como estado independiente hasta principios de este año, hoy se muestra más vigente que nunca.

La democracia funciona como un sistema de acción estratégica descentralizada (Przeworski, 1995). Todas y ninguna de las expresiones que se agitan en su seno configuran su forma de ser y de hacer. El tejido democrático se hilvana de muchos hilos, de colores y texturas distintas entre sí, que conforman su barniz siempre policromático. Como sistema, su fuerza se fundamenta en la diversidad de pareceres. La vigorosidad democrática no deriva de la Verdad con mayúscula. Lo hace más bien del error, o de la creencia en la inexistencia de una verdad absoluta. La democracia no es el régimen de la Verdad, sino de las verdades con minúscula. Si existiera la Verdad, escribe el constitucionalista italiano Gustavo Zagrebelsky (en Häberle, 2000) no podrían tener lugar las opiniones, discusiones, compromisos, elecciones, disensos, mayorías y minorías: todas las cosas sin las cuales no hay democracia posible sino absolutismo político.

La democracia no es razón pura sino práctica, para decirlo en la jerga kantiana. La verdad es sustituida por la participación, el acuerdo de la mayoría. Implica y necesita, por eso, respeto a pareceres ajenos. Comporta tolerancia y conlleva el

reconocimiento del otro como sujeto autónomo capaz de poseer su propia verdad, tan válida como la de cualquiera: profesor, banquero, periodista o campesino. O político. Y supone, también y sobretodo, la capacidad para comprender y asentir la verdad que otros nos presentan frente a la nuestra, si llegamos a convencernos de sus razones.

La sociedad abierta es pluralista y se compone de sujetos que se reconocen recíprocamente como iguales, aunque sean, crean y piensen distinto. Requiere de libertad individual, tolerancia y racionalismo crítico. Sir Karl Raimund Popper, el filósofo vienés britanizado, rescató el término acuñado por vez primera por Henri Bergson imprimiéndole significado por oposición al de sociedad cerrada, discutiendo precisamente sobre la forma en que cada una se las ve con el tema de la construcción de la verdad. La sociedad cerrada se encuentra caracterizada por la creencia en los tabúes mágicos, en tanto que en la sociedad abierta los hombres han aprendido a basar sus decisiones en la autoridad de su propio discernimiento.

La diferencia y su casi siempre inevitable sucedáneo, el disenso, cuando son racionalmente procesados, no debilitan: fortalecen. La base igualitaria que soporta las constituciones modernas lo es a modo de instrumento metodológico. No se trata de las cuevas del hombre del paleolítico, que al dibujar al mamut abatido por sus rudimentarias lanzas pensaba crear un estado de realidad. La igualdad no es la esperanza de la eliminación de las diferencias, escribió Michael Walzer en el prefacio de *Las esferas de la justicia*, quizá el alegato mejor logrado a favor del pluralismo, al afirmar que el objetivo del igualitarismo político es una sociedad libre de dominación: no más reverencias y besamanos, no más servilismo y obsequiosidad, no más temblores reverenciales, no más encumbramiento y poderío, no más amos, no más esclavos.

Ninguna incongruencia hay en preconizar la igualdad al tiempo que se encomia la diferencia. Diferencia no es lo mismo que desigualdad. Al contrario: la tutela de la diferencia es consecuencia inmediata de la asunción del pluralismo como valor democrático. Una sociedad sin diferencias sería como una pieza de música compuesta de un solo acorde: monótona y aburrida, anquilosada y esclerótica. Es que la sociedad pluralista no conoce, tampoco, la Razón con mayúscula: le bastan las razones plurales y asuntivas. En última instancia cada ser humano es, individualmente considerado,

disidente de sus semejantes, una oposición de un solo hombre como lo dice el filósofo Paolo Flores d'Arcais, con eco de las ideas de Hannah Arendt.

La ruta del pluralismo político: sociedad y política

Nada existe en el vacío social. La sociedad civil imprime a la política su propio código genético, moldea su forma y define sus contornos. Es esa ética de la vida cotidiana a la que se ha referido el filósofo italiano Salvatore Natoli, que se proyecta tanto en las grandes como en las pequeñas decisiones, la que tonifica la consistencia del entramado social. No creo en la existencia de una política de la sociedad contrapuesta con la política del Estado. Nada hay más corrosivo para la democracia que la caricatura de la sociedad civil buena y el Estado ogro. Es la lógica del simplismo que termina por arrojar el agua sucia de la bañera con todo y niño.

Si bien no siempre se muestra cierto el clásico tópico de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, sí lo es que tiene el que permiten las instituciones que ha sido capaz de construir. Se trata de un proceso complejo, en el que no existe mapa ni camino definido. La semilla se incuba y germina dentro de los espacios de la primera interacción: la familia y la escuela. La configuración de las reglas de ese microcosmo es uno de los factores decisivos para la construcción de la sociedad democrática, *ergo*, del gobierno democrático. La afirmación de paradigmas autoritarios en la familia y en la educación formalizada no puede sino tener como correlato obligado el de una sociedad civil reproductora de esquemas del mismo talante. Es que la democracia no es solamente, aunque también, un método político. Es ante todo una expresión cultural. Más allá de los diseños institucionales existe un universo de actitudes, creencias y valores: el universo de la ciudadanía.

Existe, a la par del aprendizaje de cada uno de los integrantes de la comunidad, un aprendizaje societal. A través de él se perfilan las formas de ser y de hacer de cada sociedad. Las sociedades premodernas ancladas en una configuración con amplia prevalencia de elementos irracionales, eran deudoras del pensamiento mágico que impregnaba su institucionalidad. La sociedad moderna, perfilada desde los amplios cataclismos culturales producidos por el renacimiento y el pensamiento ilustrado, es una sociedad racional. Volviendo a Popper, se trata de una sociedad que aspira a regir

sus destinos de manera autónoma, sustentada en su propio entendimiento y discernimiento: el de todos y cada uno de sus miembros.

Sinaloa: legislación electoral y pluralismo político

Sinaloa es una entidad federativa que muestra un significativo desarrollo político. Si bien el Poder Ejecutivo del estado ha sido siempre ocupado por candidatos postulados por un solo partido —el Partido Revolucionario Institucional—, no ha acontecido lo mismo en el caso de varias de las presidencias municipales y del Poder Legislativo.

Desde la década de los ochenta, el Partido Acción Nacional —segunda fuerza electoral en el estado— ha logrado ocupar las presidencias de los municipios de Ahome, Culiacán, Mazatlán, Navolato, Salvador Alvarado y, recientemente, Sinaloa de Leyva. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática ha logrado convertirse en partido gobernante en los municipios de Angostura y Rosario, mientras que el Partido del Trabajo logró en el 2001 una victoria electoral en el municipio de Mazatlán, el segundo más importante del estado.

Por otra parte, si bien el Partido Revolucionario Institucional ha conservado su tradicional hegemonía en el Poder Legislativo del estado, a la fecha comparte el poder con otros cuatro partidos políticos: los tres ya mencionados y el local Partido Barzonista Sinaloense.

Existe y se asiste, de entonces a la fecha, a una competitividad electoral que ha permitido mutar esquemas institucionales que, a su vez, han constituido instrumentos torales para traducir la pluralidad de la sociedad en espacios de poder compartido por todos los partidos políticos.

La tesis de este ensayo preconiza, precisamente, que las reformas constitucionales y legales en materia electoral, concretadas en la entidad a lo largo de las décadas de los ochenta y noventa, alentadas en la pluralidad de ideas que en lo político patentizaba la sociedad sinaloense, han constituido el principal mecanismo para la construcción y expresión institucional del pluralismo político en Sinaloa, especialmente en cuanto hace al Poder Legislativo. A él nos referiremos.

Hagamos un poco de historia. Durante el siglo pasado y lo transcurrido del presente, en Sinaloa han regido cinco leyes electorales.

La primera fue expedida mediante decreto número 213 de fecha 29 de abril de 1924, estando en funciones la Trigésima Legislatura, promulgada por el entonces Gobernador Constitucional del Estado, Manuel Rivas; la segunda fue expedida cuarenta y dos años más tarde, bajo el ejercicio de la Cuadragésima Quinta Legislatura, según Decreto número 217 de fecha 30 de enero de 1968, promulgada por el Gobernador Leopoldo Sánchez Celis; la tercera fue apenas seis años después, según decreto número 240 expedido el día 20 de junio de 1974 por la Cuadragésima Séptima Legislatura, siendo Gobernador del Estado Alfredo Valdés Montoya; cinco años mas tarde, el 20 de septiembre de 1979, la Cuadragésima Novena Legislatura expidió la cuarta ley electoral, siendo Gobernador del Estado Alfonso G. Calderón. La quinta —vigente a la fecha— fue expedida por la Quincuagésima Tercera Legislatura, promulgada y publicada por el Gobernador Constitucional del Estado, Francisco Labastida Ochoa, el 6 de mayo de 1992.

A la expedición de la vigente Ley Estatal Electoral precedieron reformas a la Constitución Política del Estado en materia político-electoral de especial significado. En este sentido, en la reforma al artículo 24, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” del 22 de abril de 1989, se previno la integración de la Legislatura del Estado con 23 diputados electos por el sistema de mayoría relativa en distritos electorales uninominales y hasta con 6 diputados electos de acuerdo con el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas estatales votadas en una sola circunscripción electoral. Asimismo, previno como beneficiarios de la asignación de diputados de representación proporcional a los partidos políticos que no hubieren obtenido 4 o más constancias de mayoría y que como mínimo alcanzaren el 1.5 por ciento del total de la votación recibida por todas las listas estatales.

Lo que nos importa destacar, como abono a la tesis que venimos sosteniendo, es la motivación de la propuesta de reformas de referencia —la cual será recurrente en similitud de términos en iniciativas posteriores, según veremos *infra*— donde el iniciador, Gobernador Constitucional del Estado, expresamente, entre otras cosas, asienta que:

En el contexto de la dinámica social, acorde a la voluntad política manifiesta del Ejecutivo a mi cargo de buscar la concertación entre

pueblo y gobierno, dispuso la realización de una consulta popular para recoger el sentir de la ciudadanía sinaloense en relación con los cambios cualitativos que la legislación electoral está demandando.

Producto de dicha consulta iniciaré ante esa honorable representación popular las reformas que precisen la intención manifiesta del Estado, de realizar los comicios en un marco de legalidad absoluta que proyecte confianza en el electorado sinaloense.

De la consulta aludida, el Ejecutivo a mi cargo toma el sentir de los que espontáneamente [sic] se manifestaron, de que *el mecanismo legal de integración del Poder Legislativo permita la coexistencia de todas las corrientes ideológicas que en el contexto de libertad, garantizada por nuestras instituciones, se manifiestan en el solar sinaloense.*

La reglamentación actual establece, para acceder a la representación proporcional de diputados, un porcentaje de votación que ha impedido que en el recinto legislativo se manifiesten voces que, aunque minoritarias, representan el pensamiento de una parte importante de nuestros conciudadanos.

El compromiso contraído de *gobernar con respeto a las ideas y posiciones políticas de todos los sectores de nuestra sociedad*, he estimado conveniente *ampliar las posibilidades de acceso de los partidos políticos a la representación popular.* (Las cursivas son nuestras).

Como consecuencia de la reforma constitucional precisada, por iniciativa del propio Gobernador Constitucional del Estado, se aprobaron reformas a la Ley Estatal Electoral, las cuales fueron publicadas en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 24 de abril de ese mismo año. La exposición de motivos permite advertir el impulso subyacente en la pluralidad manifestada con insistencia en amplios sectores de la sociedad, como motor del cambio en el diseño institucional electoral, al señalar:

Que las instituciones políticas y sociales que ha forjado el pueblo de México no son inertes, que se renuevan para impulsar la transformación de la sociedad, o bien, para adecuarse a los cambios que se producen en la conformación económica y política del país y del Estado.

Que los tiempos de crisis han sido una dura prueba, pero también una valiosa experiencia que el pueblo ha sabido soportar con madurez, porque no se ha violentado el orden constitucional, ni se han cancelado libertades; por el contrario, *la sociedad está demandando un nuevo paso en la reforma política y fortalecer las acciones de concertación entre pueblo y Gobierno.*

Que el pueblo de Sinaloa ha confirmado su voluntad de que nuestro sistema político siga desarrollándose en su pluralidad, bajo el principio de representación proporcional de mayorías y minorías, según

la fuerza electoral real de cada una de ellas, a fin de que nuestro régimen responda a las demandas de todos los sectores de la sociedad, refrendando ésta, que sólo en la democracia podrá alcanzar los satisfactores materiales, políticos y culturales propios de un país en proceso de modernización.

Que en Sinaloa y el país se ha abierto un periodo de consulta para que los ciudadanos, los colegios de profesionistas, organismos sociales, políticos y educativos, expresen sus opiniones y propuestas dirigidas a impulsar una nueva reforma en la Legislación Electoral, y que en los medios masivos de comunicación y en diversos foros, se han dado a conocer opiniones valiosas, las cuales han sido analizadas con responsabilidad, a fin de entender las expresiones legítimas de la sociedad.

Que el pueblo sinaloense ha expresado en sus propuestas, que los comicios sean más claros, en las diversas etapas de su realización; que sea simplificada la contabilidad del voto; que los órganos de Gobierno en su conformación, sean la expresión representativa del tejido social y político de una sociedad plural; que se acrecienten derechos y garantías irrenunciables para mayorías y minorías políticas; que los electores y la sociedad en su conjunto, sean corresponsables junto con los organismos electorales, para garantizar la legalidad y transparencia de las elecciones.

Que la reforma de las leyes en materia electoral y renovación de poderes, constituye un instrumento para fortalecer las acciones del poder, salvaguardar las instituciones y acrecentar la confianza en la sociedad, con igualdad de oportunidades y derechos para todos los partidos políticos.

Las nuevas fuerzas sociales que el proceso revolucionario del país ha creado, demandan mayores espacios de participación política. Sin embargo, la vigencia de un pluralismo representativo en el Congreso, no debe extremarse con riesgo de pulverizar la unidad y la fuerza del Poder Legislativo: los cambios que se proponen, significan una avance en nuestro sistema político de representación mixto, con dominante mayoritario que haga posible la conducción de un Gobierno eficaz, ya que sólo de esta manera, se pueden atender las demandas de la sociedad, de mejoramiento urbano, salud, educación, trabajo y desarrollo cultural, y no se contraviene el espíritu de la democracia, al evitar que la suma coyuntural de las minorías, supla la voluntad soberana de una mayoría consolidada mediante el voto ciudadano.

Con las reformas que se proponen, los partidos y organismos sociales deben de asumir la función global de madurar una sociedad civil participativa; relación que debe conducir al compromiso de fortalecer la vida política de Sinaloa, para seguir avanzando en la renovación ineludible de nuestra vida democrática. (Las cursivas son nuestras).

El 1° de abril de 1992 fueron publicadas en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” nuevas reformas al ordenamiento cívico local, las cuales modificaron un total de catorce preceptos, entre ellos, el artículo 14 y, de nueva cuenta, el artículo 24. La reforma al primero de los preceptos tuvo como fin trasladar al segundo domingo del mes de noviembre la fecha de la jornada electoral, para acortar el lapso que mediaba entre la elección y la toma de posesión de los representantes populares electos. La modificación al artículo 24 tuvo como principal objetivo aumentar a 39 el número de curules del Poder Legislativo, manteniendo en 23 el número de los diputados uninominales e incrementando a 16 el de los de representación proporcional. Así, se establecieron las bases legales para que la siguiente Legislatura se integrara con un 60 por ciento de diputados electos por el principio uninominal y un 40 por ciento por el plurinominal.

En la exposición de motivos correspondiente, el titular del Poder Ejecutivo enfatiza que:

La vocación democrática y la cultura de los mexicanos nos ha permitido estructurar y actualizar, permanentemente, un sistema que sustenta la convivencia política, *apoyado en premisas irrevocables como la observancia de la legalidad constitucional, la tolerancia y el respeto a la diversidad, el dialogo razonado, la competencia pacífica entre ofertas políticas y la obediencia al mandato popular expresado en las urnas.*

La actualización del sistema electoral, en las últimas décadas, es consecuencia del desarrollo que ha vivido la nación y la sociedad misma.

Sinaloa ha vivido y vive un proceso de consolidación de su vida democrática, al cual concurren la voluntad política del Gobierno del Estado, la de los partidos políticos y la de la sociedad civil, los cuales nos hemos propuesto avanzar en el perfeccionamiento del marco jurídico que rige los procesos electorales.

Así, hemos ampliado la participación de la sociedad en las contiendas electorales; *los partidos políticos han incrementado su presencia en la vida pública*, y hemos dado importantes pasos para alcanzar una mayor transparencia en las elecciones.

Los sinaloenses mantenemos una firme vocación democrática y queremos avanzar más en cuanto a los procesos electorales, dar un paso adelante en la búsqueda por *construir una sociedad más fuerte, más unida, mejor organizada y representada.* (Las cursivas son nuestras).

La actual Ley Estatal Electoral, como lo hemos referido antes, fue publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” del 6 de mayo de 1992. En muchos sentidos, fue corolario del movimiento de reforma que buscaba perfeccionarse a través de una regulación que, perfilada en la línea que a partir de la década anterior se venía definiendo, estableciera un tratamiento integral e imprimiera mayor claridad a las reglas de la competencia política en el Estado. Entre los aspectos de mayor importancia, se instituyó la instalación del Tribunal Estatal Electoral, creado a partir de las reformas del 21 de agosto de 1989, desde el principio del proceso electoral, a fin de garantizar la legalidad de su desarrollo desde su inicio, así como nuevas reglas para su integración.

De acuerdo con las reformas constitucionales del 1° de abril anterior, la Ley previno la ampliación, de 29 a 39, del número de diputados integrantes del Congreso del Estado, para acceder por la vía de representación proporcional un total de 16 legisladores. En esa razón, se incluyó una nueva fórmula de asignación de las curules atinentes a esta vía, bajo el principio de que el porcentaje de la votación obtenida por cada partido habría de reflejarse en la proyección de la representación en dicho órgano.

Diputados plurinominales e institucionalización del pluralismo

Establecidos por primera vez en el paisaje electoral mexicano a raíz de la reforma constitucional en materia política de 1977, la fórmula de los diputados plurinominales ha significado un punto de inflexión con una tradición política de siglos y, con su ingeniería política y constitucional, fue quizás el inicio, la puesta al día de México con los instrumentos de los sistemas políticos y las democracias contemporáneas, el empatar, en más de un sentido, la política electoral con la política real, como señalan Becerra, Salazar y Woldenberg.

El pluralismo político en el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa ha podido expresarse institucionalmente a merced de la expansión de la figura de los diputados de representación proporcional en la legislación electoral.

Tomemos como muestra la elección de 1992, la primera donde se aplica la tasa de 16 diputados asignados por el principio de representación proporcional. El Partido Revolucionario Institucional obtuvo la totalidad de las curules atinentes al principio de mayoría relativa —23, en esa fecha— al obtener el 59.4 por ciento de la votación, a la

que se sumó una más que le fue asignada por el principio de representación proporcional, para completar 24 curules. Por su parte, el Partido Acción Nacional, no obstante no haber ganado, como tampoco lo hicieron los restantes partidos que participaron en el proceso, ningún distrito uninominal, obtuvo la asignación de 13 curules exclusivamente por la vía de la representación proporcional, al conseguir el 33.2 por ciento de la votación estatal emitida. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática, con el 5.2 por ciento de los votos, obtuvo la asignación de 2 curules.

Lijphart, el autor de uno de los estudios comparativos más completos de las democracias contemporáneas, ha distinguido entre dos modelos básicos: la democracia mayoritaria y la democracia de consenso. Unos de los aspectos más tajantes de la distinción entre uno y otro modelo son, a juicio del politólogo europeo, los métodos de mayoría y mayoría relativa y la representación proporcional. Al respecto ha escrito:

El sistema electoral clásico de la democracia mayoritaria es el del distrito uninominal y de mayoría relativa o sistema mayoritario, mientras que en la democracia de consenso es característico el uso de la representación proporcional. Los métodos de mayoría y mayoría relativa con distrito uninominal son un perfecto reflejo de la filosofía mayoritaria: gana el candidato elegido por el mayor número votantes y el resto del electorado se queda sin representación. Además, el partido que obtenga una mayoría o una mayoría relativa de votos en el conjunto del país suele tener una representación desmesurada en términos de escaños parlamentarios. En marcado contraste con ello, la intención básica de la representación proporcional es evitar ese problema con una adecuada representación de las mayorías y de las minorías, y traducir proporcionalmente votos en escaños, en vez de que recaiga sobre un partido una representación que peque de exigua o excesiva.

En contra de las voces que se escuchan en la hora actual a favor de la desaparición de los diputados de representación proporcional, nosotros creemos que ahora, como ayer, siguen siendo necesarios y convenientes. No es posible dar cuenta aquí de todos los argumentos. Es frecuente que las discusiones alcancen un nivel de complejidad bastante intrincado. Frecuente es también que partan de premisas de dudosa pertinencia (es recurrente escuchar, sólo a guisa de ejemplo, ¡el ahorro económico que ello significaría!). En esta situación siempre es conveniente partir de los

principios. Al margen de las especificidades que presenta cada modelo de legislación concreto que, por cierto, suelen diferir significativamente, el sistema de representación proporcional se alienta en la filosofía que procura hacer coincidir los votos con los escaños parlamentarios, para institucionalizar las expresiones políticas de la sociedad que, de otra forma, carecerían de representación. Como señala Emanuele Martota:

El sistema proporcional acompaña a la moderna democracia de masas y a la extensión del sufragio universal. Partiendo de la consideración según la cual una asamblea representativa debe dar espacio a todas las necesidades, a todos los intereses y a todas las ideas que animan el organismo social.

Nohlen ha escrito que una parte de las consecuencias políticas de la fórmula proporcional tiene que ver con los detalles técnicos de los sistemas proporcionales. Ese, el de los detalles, es el gran tema que reclama atención. Ojalá no extraviemos el camino.

BIBLIOGRAFIA

- Becerra Ricardo, Salazar Pedro y Woldenberg José, *La mecánica del cambio político en México*. Ediciones Cal y Arena, México, 2000.
- Flores d'Arcais Paolo, *Hannah Arendt. Existencia y libertad*. Editorial Tecnos, Madrid, 1996.
- Havel Václav, *Meditaciones estivales*. Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores, Madrid, 1990.
- Martota Emanuela, en *Diccionario de Política*, Bobbio Norberto y Nicola Mateucci (Coordinadores). Editorial Siglo XXI, México, 1982.
- Nohlen Dieter, *Sistemas Electorales y Partidos Políticos*. Fondo de Cultura Económica, México, 1998.
- Lijphart Arend, *Las democracias contemporáneas*. Editorial Ariel, Barcelona, 1999.
- Natoli Salvatore, *Stare al mondo. Escursioni nel tempo presente*. Feltrinelli, Roma, 2002.
- Popper Karl R., *La sociedad abierta y sus enemigos*. Ediciones Paidós Ibérica, 1957.
- Przeworski Adam, *Democracia y mercado*. Cambridge University Press, 1995.
- Walzer Michael, *Las esferas de la justicia*. Fondo de Cultura Económica, México, 2001.
- Zagrebelsky Gustavo, Prefacio a Häberle Peter, *Diritto e verità*. Giulio Einaudi editore, Torino, 2000.